NATIONS UNIES
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
AUX DROITS DE L'HOMME

PROCEDURES SPECIALES DU
CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME

UNITED NATIONS
OFFICE OF THE UNITED NATIONS
HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

SPECIAL PROCEDURES OF THE
HUMAN RIGHTS COUNCIL

Mandatos del Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; y del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.

REFERENCE: UA G/SO 214 (107-9) G/SO 214 (3-3-16) Indigenous (2001-8)
GTM 10/2013

6 de diciembre de 2013

Excelencia:

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; y Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, de conformidad con las resoluciones 16/5, 17/2, y 24/9 del Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de su Excelencia la información que hemos recibido en relación con los ataques que través de diferentes medios de comunicación han sido dirigidos en contra de los magistrados **María Cristina Fernández García, Herberth Arturo Valencia Aquino y Erick Gustavo Santiago de León**, integrantes de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Civil y Mercantil.

Según las informaciones recibidas:

Los magistrados María Cristina Fernández García, Herberth Arturo Valencia Aquino y Erick Gustavo Santiago de León, que integran la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Civil y Mercantil, habrían sido atacados en distintos medios de comunicación en las últimas semanas en un presunto hecho de intimidación y hostigamiento. Dichos ataques se habrían generado como resultado de las sentencias dictadas por el referido órgano jurisdiccional, en su calidad de Tribunal de Amparo, en los expedientes números 01044-2012-363 (sentencia de 17 de octubre de 2012) y 01010-2012-00134 (sentencia de 20 de agosto de 2013), en las cuales se amparó con fundamento en la Constitución y en estándares internacionales sobre derechos humanos, a comunidades indígenas que denunciaron la violación al derecho a la propiedad ancestral sobre la tierra y el territorio de los pueblos indígenas.

En los medios se les habría tachado de tener actitudes criminales e irresponsables, de poner en peligro la estabilidad social del país y de promover invasiones, robo y violencia, entre otras acusaciones. Estos ataques vendrían de particulares y funcionarios públicos, incluyendo a la Registradora General de la Propiedad, autoridad impugnada en las citadas acciones de amparo.

Se presume que estos ataques podrían estar relacionados con el ejercicio independiente e imparcial de la judicatura, ya que en dichas sentencias, la Sala Tercera habría reconocido la personalidad jurídica de las comunidades indígenas que denunciaron anomalías en inscripciones en el Registro General de la Propiedad, así como el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunal. Dichos ataques podrían interferir con la independencia judicial de los jueces y magistrados, ya que debido a la presión a la que estarían siendo sometidos estos magistrados, otros jueces no estarían dispuestos a defender los derechos de los pueblos indígenas. Estos actos se enmarcarían también en un clima creciente de actos de intimidación y desprestigio contra defensores y defensoras de los derechos humanos, incluyendo a operadores de justicia. Los tres magistrados habrían presentado las denuncias correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Sin implicar de antemano una conclusión sobre los hechos, nos permitimos hacer un llamamiento al Gobierno de su Excelencia para buscar una clarificación de los mismos, con el fin de asegurar que los magistrados puedan desarrollar sus funciones con independencia e imparcialidad sin presiones o amenazas.

En este sentido, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985, y en particular sobre el principio 2 que estipula: “Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.”

Por su parte, el principio 1.1. de los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial señala que “[u]n juez deberá ejercer su función judicial de forma independiente, partiendo de su valoración de los hechos y en virtud de una comprensión consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón” (Aprobados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su resolución E/CN.4/2003/65).

En este contexto, en su informe al Consejo de Derechos Humanos de 2006, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados señala que “[e]s frecuente que los jueces o abogados se vean expuestos a enjuiciamiento, amenazas o sanciones económicas o profesionales, a raíz de acciones que en realidad en nada contradicen a sus obligaciones profesionales y deontológicas” y concluye que “[r]esulta preocupante que -a pesar de las garantías legales en cada país y de los múltiples instrumentos internacionales destinados a preservar su independencia- abogados, jueces, fiscales y auxiliares de justicia en todas las regiones del mundo, con frecuencia se vean sometidos a presiones, hostigamientos y amenazas que pueden llegar hasta la desaparición forzada, el asesinato o la ejecución extrajudicial por el mero hecho de llevar a cabo su labor” (A/HRC/4/25, paras. 25 y 61).

En relación con las alegaciones recibidas que indican que los actos de intimidación en contra de los magistrados Fernández García, Valencia Aquino y Santiago de León podrían estar relacionados directamente con su trabajo en la defensa de los derechos humanos, en particular los derechos de los pueblos indígenas, quisiéramos referirnos a la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Los artículos 1 y 2 establecen, respectivamente, que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y que es la responsabilidad primordial y el deber de todos los Estados de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica todos esos derechos y libertades.

Asimismo, en su artículo 12.2. la Declaración hace referencia a que “el Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación y negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.

Con respecto a las alegaciones recibidas indicando que los ataques a los magistrados se atribuirían a particulares, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre la Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/13/13 de 15 de abril de 2010, la cual reconoce “la necesidad inmediata de poner fin a las amenazas, el acoso, la violencia, incluida la violencia de género, y las agresiones de estados y entidades no estatales contra quienes se dedican a la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, así como de adoptar medidas concretas para prevenirlos”. En esta Resolución, el Consejo de Derechos Humanos “insta a los Estados a que promuevan un entorno

seguro y propicio en el que los defensores de derechos humanos puedan actuar libres de obstáculos e inseguridad”.

Asimismo, la Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en su informe a la Asamblea General A/65/223 de 4 de agosto de 2010, párrafos 28 y 29, señala que en el contexto de violaciones a los derechos humanos de los defensores cometidas por agentes no estatales, la responsabilidad de los mismos de respetar los derechos de los defensores “no libera al Estado de las obligaciones que le incumben en virtud de las normas de derechos humanos de respetar, proteger y aplicar los derechos humanos, incluidos los de los defensores de los derechos humanos”. (...) la Relatora Especial sostiene que la obligación del Estado de proteger “consiste, en primer lugar, en asegurar que los defensores no sufran violaciones de sus derechos a manos de agentes no estatales. La falta de protección podría, en determinadas circunstancias, comprometer la responsabilidad del Estado. En segundo lugar, los Estados deberían proporcionar un recurso eficaz a los defensores cuyos derechos humanos sean violados. Para ello, todas las violaciones de los derechos de los defensores deberían investigarse con prontitud e imparcialidad y los infractores deberían ser sometidos a juicio. Es fundamental combatir la impunidad por las violaciones cometidas contra los defensores, para que éstos puedan trabajar en un entorno seguro y propicio.”

Teniendo en cuenta la urgencia del caso, agradeceríamos recibir del Gobierno de su Excelencia una respuesta sobre las acciones emprendidas para proteger los derechos de las personas anteriormente mencionadas.

Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar los hechos llevados a nuestra atención. En este sentido, estaríamos muy agradecidos de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes, siempre y cuando sean aplicables al caso en cuestión:

1. ¿Son exactos los hechos a los que se refieren las alegaciones presentadas?
2. ¿Fue presentada alguna queja por parte de las supuestas víctimas o en su nombre?
3. Por favor, proporcione información detallada, así como los resultados si están disponibles, sobre las investigaciones, u otro tipo de pesquisas, iniciadas en relación con el caso. Si éstas no hubieran tenido lugar o no hubieran sido concluidas, le rogamos que explique el por qué.
4. Por favor, proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas por parte del Estado para proteger la vida e integridad física y psicológica de los magistrados Fernández García, Valencia Aquino y Santiago de León, con el fin de que puedan desempeñar sus funciones, libre de cualquier interferencia y protegidos

de todo ataque, amenaza e intimidación. Si éstas no fueron adoptadas, le rogamos que explique el porqué.

Garantizamos que la respuesta del Gobierno de su Excelencia a cada una de estas preguntas será incluida en los informes que presentaremos a la atención del Consejo de Derechos Humanos para que la examine.

A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan.

Acepte, Excelencia, la expresión de nuestra más distinguida consideración.

Margaret Sekaggya
Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos

Gabriela Knaul
Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados

James Anaya
Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas